

El poder laico

Mauricio Merino

El presidente Obama juró su investidura sobre la Biblia, tras la oración de un ministro religioso. Pero no podría emplear la religión para dirimir asuntos de gobierno, para hacer política, ni mucho menos para discriminar o excluir a quienes no comparten su credo personal.

En aquel país, el sentido de la laicidad es respetado: cada quien tiene sus creencias, pero la política acepta e incorpora a todas. En México, en cambio, la religión no está siendo ajena a la búsqueda de medios de poder. No hay espíritu laico, sino militante.

Decir que el activismo religioso que hemos visto en estos días en nuestro país no es ajeno a los tiempos electorales que ya corren es decir una obviedad. De ahí que preocupe tanto ver al presidente Calderón metido en esos lances. Por supuesto que es lícito buscar alianzas, pero hacerlo a costa de la laicidad que ha de guardar el jefe del Estado es inaceptable.

Fue un organismo de su gobierno el que editó las tesis de Pedro Salazar sobre *La laicidad: antidoto contra la discriminación* (Conapred, 2007). Su autor nos recuerda que la laicidad ha evolucionado desde la Ilustración de la mano con la tolerancia y que no supone solamente la aceptación del otro, sino su incorporación activa en el derecho y en el discurso; el respeto a la creencia ajena y la distancia inequívoca entre la religión y la política.

Nadie sensato le pediría al Presidente que se vuelva ateo. Por el contrario, una de las virtudes del Estado laico consiste en que cada uno puede abrazar su propia fe, sin distinguirse ni separarse de los demás.

La laicidad no equivale a la militancia antirreligiosa, ni a una suerte de religión civil de descreídos. Significa lisa y llanamente el predominio de la igualdad jurídica y del respeto activo hacia las diferencias. Y, en consecuencia, del rechazo a cualquier forma de discriminación.

En su intervención en el Encuentro Mundial de las Familias, convocado por la Iglesia católica, hubo un cálculo político. El Presidente buscó reforzar sus señas de identidad católica con los millones de electores potenciales que profesan esa religión, pensando quizá en trasladarle simpatías a su partido.

Pero al hacerlo, no sólo olvidó que preside un Estado en el que la ley electoral prohíbe expresamente la apelación a los credos religiosos para ganar votos, sino que avaló la fuerza de la jerarquía católica que, sin ambages, ha declarado su intención de influir cada vez más, y más directa-

mente, en la vida política de México. Es decir, de romper la laicidad.

Esa jerarquía está formada por personas con muchas ambiciones y una larga historia de conflictos con el poder político, que en los últimos meses ha demostrado ser capaz de aceptar recursos públicos para sus propios fines, como sucedió en Jalisco; de hacer la vista gorda frente a los casos de pederastia que se han documentado; de llamar públicamente a enfrentar las decisiones del Poder Legislativo; de proclamar su derecho a integrar partidos; o de declarar inexistentes matrimonios válidos por razones de poder, como en el caso de los Fox, mientras divulga su rechazo a la reconstrucción de familias en segundas nupcias.

Usar la religión para hacer política produce discriminación, intolerancia y polarización. Y nada de eso debería ser promovido desde la jefatura del Estado, y mucho menos en un año que promete ya ser muy difícil.

Que cada quien defienda a su propio Dios y que conserve su derecho a declararlo en público. Pero hacer política con argumentos y alianzas religiosas es, por el contrario, sellar un pacto con el diablo.

Profesor investigador del CIDE

EN EL ENCUENTRO MUNDIAL

DE LAS FAMILIAS, CONVOCADO POR LA IGLESIA, EL PRESIDENTE BUSCÓ REFORZAR SUS SEÑAS DE IDENTIDAD CATÓLICA CON MILLONES DE ELECTORES POTENCIALES

